

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de San Fernando  
CAUSA ROL : C-1242-2017  
CARATULADO : MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA/INMOSA S.A.

San Fernando, diez de Enero de dos mil diecinueve

**VISTOS:**

Que, con fecha **14 de julio de 2017**, compareció don **JUAN JOSE VALENZUELA**, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, cédula nacional de identidad N° 14.399.523-2, como mandatario judicial de la Ilustre Municipalidad de Nancagua, persona jurídica de derecho público, RUT N°69.090.400-4, representada legalmente por su Alcalde don Luis Eduardo Escanilla Gaete, cédula nacional de identidad N°7.831.337-4, todos domiciliados en Domingo Jaramillo N°99, Nancagua.

Que, en conformidad a lo establecido en los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, interpuso demanda en juicio ejecutivo de mayor cuantía, por obligación de dar en contra de la empresa **INMOSA S.A.** persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario N°76.141.469-0, representada legalmente por don Patricio Mario Uribe Andrade, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°11.714.532-8, todos domiciliados para estos efectos; en Avenida Armando Jaramillo 1053, Nancagua, solicitando se despachará en su contra, mandamiento de ejecución y embargo por la suma de \$76.616.556.- ordenando que se siga adelante con la ejecución hasta el entero pago de dicha suma, con expresa condenación en costas.

Sostuvo que la empresa Inmosa S.A., (en adelante e indistintamente “la sociedad”, “la empresa” o “la ejecutada”) es una sociedad de responsabilidad limitada, que se encuentra inserta en el ámbito comercial, lo que a su vez también se desprende de sus actividades económicas vigentes en el Servicio de Impuestos Internos, donde se da cuenta que se trata de una sociedad de inversión y rentistas de capitales mobiliarios en general. El inciso primero del artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063, que contiene el texto de la ley de Rentas Municipales, establece que, “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuera su naturaleza o denominación, está sujeta a contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente Ley”. A su vez, la primera parte del inciso primero del artículo 24 del mismo cuerpo legal señala que “la patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco, o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda...” por último el artículo 27 de la misma Ley dispone que “sólo están exentas del pago de la contribución de la patente municipal las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, del culto religiosos, culturales, de ayuda mutua a sus asociados,



artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios”, hipótesis en la cual no se encuentra la ejecutada.

Manifestó que conforme a las señaladas disposiciones legales y considerando que la ejecutada, es una persona jurídica que persigue fines de lucro, se encuentra obligada al pago de la contribución de la patente municipal establecida en el antes citado artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales. A mayor abundamiento, sostuvo que en el inciso primero del artículo 24 de la ley de rentas municipales establece “Tratándose de sociedades de inversiones o sociedades de profesionales, cuando éstas no registren domicilio comercial, la patente se deberá pagar en la comuna correspondiente al domicilio registrado por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos. Para estos efectos, dicho Servicio aportará esta información a las municipalidades, por medios electrónicos, durante el mes de mayo de cada año.” En dicho escenario la propia ley señala de manera expresa, sin mediar interpretación en contrario, que la sociedad de Inversiones se encuentra gravada por patente comercial, lo que ha sido refrendado por jurisprudencia tanto administrativa como judicial.

Añadió, que la empresa en cuestión, realiza conforme a su giro u objeto social, actos de comercio, conforme a lo dispuesto en el artículo tercero del Código de Comercio, lo cual indica; de manera inequívoca, que la ejecutada, se constituyó para el ejercicio de una actividad lucrativa, sujeta al pago de patente municipal, por tratarse de una actividad terciaria, conforme al artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063 del año 1979. En efecto, y precisamente, es el objeto social, lo que permite determinar las actividades y hechos gravados de la sociedad, con independencia de si estas últimas pudieran o no desarrollarse temporalmente; toda vez que, la sociedad se encuentra en condiciones de ejercer dichas actividades lucrativas, pues, para ello ha sido constituida. Expuso que así lo ha dispuesto la excelentísima Corte Suprema de Justicia, en causa Rol 21186-2014, dictada con fecha 18 de marzo de 2015.

Manifestó, que la ejecutada, no obstante haber ejercido una actividad gravada con la contribución antes señalada, no ha pagado suma alguna por dicho concepto, cuyo monto asciende a \$76.616.556.- por el año 2016, y que corresponden a los períodos señalados en el certificado municipal acompañado, donde se detalla en forma acabada a qué corresponde la suma cuyo pago es reclamado por este acto.

Precisó que la obligación consta en un título ejecutivo, de esta manera, al 12 de julio de 2017, la deuda de la ejecutada por contribución de patente municipal asciende a la suma de \$76.616.556.- Dicha suma abarca los periodos correspondientes al año 2016 e incluye la totalidad de los reajustes e intereses establecidos en el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales, en relación al artículo 53 del Código Tributario. Dicho Monto corresponde al detalle que a saber es el siguiente; Valor Patente: \$63.312.089; IPC: \$1.617.196, interés:



\$11.687.271; total deuda: \$76.616.556.- El monto adeudado consta del certificado emitido por el Secretario Municipal del municipio, doña Angelina Bustamante Montecinos, de fecha 12 de julio de 2017. Dicho certificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales, posee mérito ejecutivo para los efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales, entendiendo que el derecho de patente corresponde al 5 por mil de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 inciso segundo de la ley de Rentas Municipales.

Añadió que la obligación de que da cuenta el título ejecutivo es líquida, actualmente exigible y el título ejecutivo no se encuentra prescrito. Así tratándose de una obligación de dar una suma de dinero y, considerando el tenor del certificado constitutivo de título ejecutivo, aparece claro que la deuda de que da cuenta dicho título es líquida. Además dicha obligación no se encuentra sujeta a condición, plazo, modo o modalidad alguna que suspenda o limite su exigibilidad, por lo que es actualmente exigible.

Por último expresó, que es menester señalar, que el título se encuentra actualmente vigente, toda vez que la prescripción no ha sido previamente declarada.

Que, con fecha 05 de octubre de 2017, consta notificación y con fecha 06 de octubre de 2017 consta requerimiento de pago al demandado.

Que, con **fecha 16 de octubre de 2017**, compareció don Carlos Amarguez, Abogado en representación de **RAULI S.A., antes Inmosa S.A.**, Rut N° 74.141.469-0, oponiendo las siguientes excepciones:

**La excepción 14° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la nulidad de la obligación.** Fundó su excepción en que por la naturaleza jurídica de la ejecutada en autos, la sociedad no se encuentra sujeta al pago de patentes municipales. Indicó que las actividades que desarrollaba su representada, se enmarcaban dentro del concepto de "inversión pasiva" el que consiste, en términos generales, en la adquisición de toda clase de bienes con fines rentísticos, sea cual sea la fórmula jurídica que utilice el inversionista. Bajo ese contexto, la sociedad Inmobiliaria El Maitén Limitada, no ha efectuado el pago que pretende la ejecutante en autos por concepto de patentes municipales, debido a que dicha sociedad no se encuentra afectada por ley al pago de aquel impuesto, así lo consagran en forma categórica un sin número de dictámenes emanados de la Contraloría General de la República.

Manifestó que en ese contexto, dado que el giro de su representada no importa la producción de bienes, ni tampoco la prestación de servicios, no es posible enmarcar la actividad empresarial que efectivamente ha desarrollado y que desarrolla, dentro de aquellas que configuran el hecho gravado que contempla el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063 del año 1979, en otros



términos, al no desarrollar una de las actividades gravadas, no es posible afirmar que su representada se encuentra afecta al pago de patentes Municipales.

Expuso, que resulta útil destacar lo señalado por la jurisprudencia administrativa de la CGR, a través de los Dictámenes N° 6.416 del año 1995; N° 24.082 y N° 32.292, ambos del año 2002 y específicamente los dictámenes N° 43.843 y N° 27.677, ambos del año 2010. Así, los actos administrativos citados, se refieren a que la determinación de si una empresa ejerce una actividad lucrativa sujeta en forma efectiva al pago de patentes municipales, es una cuestión de hecho que compete verificar al Municipio respectivo, ponderando los antecedentes del contribuyente y los que reúna el propio Municipio mediante procedimientos de inspección concretos y verídicos, u otros medios que se estimen pertinente para establecer la efectividad de la información. Púes bien, en el caso de autos la determinación de si su representada ejerce o no una actividad lucrativa sujeta al pago de patentes municipales, no ha sido acreditada por ningún medio, situación que es evidente por el hecho de que la sociedad Inversiones Santa Paula Limitada, no desarrolla actividades gravadas por el D.L. N° 3.063, lo cual se manifiesta en forma evidente con una simple y básica ponderación y análisis de sus antecedentes sociales.

Continuó añadiendo, que el hecho de cobrar patentes comerciales a este tipo de sociedades, es exactamente lo mismo que pretender cobrar patentes por eventuales depósitos a plazo, inversiones en fondos mutuos, acciones u otras inversiones pasivas que realice o mantenga una persona natural. En el fondo, el desarrollo económico que efectúan este tipo de sociedades no producen ningún tipo de externalidades negativas en las comunas donde se domicilian simplemente para efectos tributarios, es más, es indiferente para el buen y normal funcionamiento de cada una de las comunas y de las entidades municipales respectivas, el ejercicio de las actividades económicas que desarrollan las sociedades de inversión pasiva. Por lo mismo, dicha situación debe ser ponderada al momento de fijar este tributo, situación que, por lo demás, la misma ley reconoce en forma expresa en las normas legales citadas precedentemente. En la práctica, esta situación es equivalente a que la I. Municipalidad de Nancagua demande y pretenda cobrar una gigantesca suma de dinero por concepto de patentes municipales a una persona natural, por el solo hecho de poseer una gran cantidad de bienes.

Añadió, que es menester destacar que en la historia fidedigna del D.L. 3.063, se establece claramente que el motivo por el cual los municipios tienen la facultad de cobrar patentes comerciales, es debido a las externalidades negativas que puede traer consigo el ejercicio de ciertas profesiones, oficios o industrias. Pues bien, como ha quedado demostrado ampliamente, su representada no ocasiona ni ha ocasionado jamás, ninguna externalidad de carácter negativa para



el Municipio, ni para ninguno de los vecinos, comerciantes, locatarios, etc., emplazados en dicha localidad.

Las inversiones efectuadas por Inmosa S.A., se enmarcan dentro de aquellas comprendidas en el artículo 20 número 2° de la Ley de impuesto la Renta, es decir, sociedades denominadas como "Sociedades de Inversión Pasiva", no están obligadas a declarar sus rentas mediante contabilidad completa. Así, el D. L. N° 3.063 que regula el pago de patentes comerciales, regula la hipótesis referida en el punto 14 precedente, y dispone en su artículo 24 inciso quinto lo siguiente; "En los casos de los contribuyentes que no estén legalmente obligados a demostrar sus rentas mediante un balance general pagarán una patente por doce meses igual a una unidad tributaria mensual".

Manifestó que de esta forma, queda absolutamente claro, que la supuesta obligación contenida en el supuesto título ejecutivo fundante de esta acción es completamente nula, toda vez que establece una obligación, es decir, el pago de una astronómica suma de dinero, sin contemplar una causa u objeto correlativa/o. Así al pretender cobrar esta irrisoria suma, la I. Municipalidad de Nancagua está incurriendo en un grave abuso del derecho, sin justificación alguna. Es más, dicha Entidad municipal se ha alejado absolutamente del tenor, sentido y finalidad de la ley, según lo que se ha descrito en el punto 12 anterior, pues básicamente lo que pretende realizar es establecer un impuesto al patrimonio sin norma alguna que lo autorice, enriqueciéndose, de paso, sin causa a costa de su representada.

Indicó que, en el peor de los casos, su representada podría llegar a pagar 1 Unidad Tributaria Mensual, en forma anual, por concepto de patentes Municipales, por sus inversiones pasivas, más los derechos de aseo correspondientes, por lo mismo, es claro que la pretensión contenida en la demanda ejecutiva que ha presentado la I. Municipalidad de Nancagua, se aleja en lo más absoluto de lo dispuesto en nuestra legislación nacional. Incluso, el actuar de dicha entidad Municipal constituye una violación a la propia Constitución Política de la República pues, en la especie, no se estarían respetando las formalidades, en relación con el artículo 19 N° 20 de la CPR. Dicha garantía constitucional, asegura que cualquier impuesto establecido en nuestro ordenamiento jurídico, será soportado en la forma establecida por la ley y no en base a una sesgada y antojadiza interpretación de la misma, tal como lo ha realizado la I. Municipalidad de Nancagua, en que ha establecido en forma infundada un impuesto patrimonial.

Refirió que en la especie su representada, que mantiene solamente inversiones pasivas que no generan ninguna externalidad negativa a la I. Municipalidad, la que hoy se ve afectada por un teórico título ejecutivo que da cuenta de una astronómica deuda que no tiene justificación alguna. Si las inversiones pasivas que mantiene su representada, estuvieran a nombre de una



persona natural, no se podría discutir que ésta no podría estar afecta al pago por concepto de patentes Municipales. En otros términos, para el demandante de autos el hecho de que su representada sea una persona jurídica, trae consigo necesariamente que se vea afectada a un impuesto desorbitante, sin lógica y fundamento alguno.

En vistas de lo anterior, y solamente ponderando los argumentos esgrimidos y vertidos en la primera sección en las que se desglosa la presente excepción, es manifiesto que la supuesta obligación que da cuenta el Certificado Municipal N° 76 emitido por la supuesta Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Nancagua, doña Angelina Bustamante Montecinos, (supuesto título ejecutivo fundante de la acción materia de autos), y que debería soportar su representada, es nulo, debiendo aceptarse de plano la presente excepción.

Citó jurisprudencia de causa Rol Ingreso Corte N° 38.070-2015, la Excmá. Corte Suprema, Causa de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago N° Ingreso 731-2016. Agregó también que ante el 1° Juzgado de Letras de Curicó mediante sentencia de fecha 24 de octubre de 2016, en autos ROL N° C-2064-2015 señaló expresamente en su considerando séptimo que: "(...) es necesario precisar que la naturaleza jurídica de las patentes municipales es la de un impuesto de carácter municipal, que sólo pueden ser establecidos por ley y que dada su naturaleza debe existir siempre un hecho gravado", sentencia que fue confirmada por la Iltrma. Corte de Apelaciones de Talca mediante sentencia de fecha 17 de julio de 2017 en autos N° Ingreso 3813-2016.

Refirió que el denominado Memorándum N° 99 de fecha 10 de julio del 2017 emitido por el teórico Director Subrogante Rodrigo Soto Almuna y que habría servido de antecedente al pseudo Certificado Municipal que sirve de base para la presente ejecución, señala en su parte pertinente lo siguiente: "...le comunico a usted, que la empresa Inmobiliaria Mosa Limitada, RUT N°78.232.500-0, de acuerdo a nuestros registros, se encuentra, "al parecer", desarrollando una actividad lucrativa sin contar con la respectiva patente municipal que ampare dicha actividad".

Que en virtud de lo anterior, es claro que dicho certificado es nulo por falta de causa, pues si la ejecutante hubiera analizado en forma seria y detallada todos y cada uno de los elementos, que dicen relación con la estructura de su representada hubiera llegado a la conclusión que dicha sociedad se encuentra totalmente exenta del pago de patentes municipales, dada su naturaleza jurídica de sociedad de inversión pasiva, hipótesis, que expresamente reconoce en el mencionado Certificado Municipal al señalar que su representada "al parecer" está desarrollando una actividad lucrativa. En el fondo es la propia ejecutante quien reconoce que, a pesar de que una empresa tenga un capital propio tributario puede estar exenta del pago de patentes Municipales.



También fundó su excepción en la inconstitucionalidad del cobro, ya que en el caso de autos, tanto en el Certificado Municipal N° 76, como en el Memorándum

N° 100, singularizados anteriormente, se reconoce expresamente que se encuentran ante el cobro de una suma de dinero por concepto de un impuesto. En relación a esta materia, es necesario hacer presente que si efectivamente lo que pretende cobrar la contraria, a través de este teórico certificado corresponde a un impuesto, estaríamos frente a una situación en donde se vulnerarían normas de carácter constitucional. Así las cosas, el artículo 19 N° 20 de la Constitución Política de la República busca resguardar los derechos del contribuyente, tanto desde el punto de vista de asegurar un trato igualitario en atención a su capacidad económica, como al hecho de que los tributos no pueden afectar su derecho de propiedad, por medio de tener el carácter confiscatorios.

Lo anterior, los lleva a sostener que, en base a la historia fidedigna de la Carta Fundamental e integrando los principios recogidos a lo largo de dicho texto constitucional, la sustitución del término "*haberes*" por la expresión "*rentas*", tuvo una finalidad clara y precisa, esto es, evitar la afectación en forma directa al patrimonio de las personas, de manera de salvaguardar debidamente el derecho de propiedad de los contribuyentes. La interpretación anterior, encuentra especial sustento en el principio del hombre, por sobre el Estado, el cual se manifiesta a lo largo de todo el texto Constitucional, particularmente en el artículo 1° de dicho texto normativo. Dicho precepto reviste un carácter fundamental para nuestro orden constitucional pues es la razón por la cual el Estado no puede pretender para fines propios soslayar atributos esenciales del hombre, como lo son el patrimonio y su respectivo derecho de propiedad. Adicionalmente, es necesario hacer presente que por motivos de flexibilidad presupuestaria y prudencia, la CPR establece como regla general la no afectación de los tributos, de manera que el producto de los mismos ingrese siempre a fondos generales de la nación. Por consiguiente, en el evento de que se pretendiera cobrar este impuesto a una sociedad simplemente por tener inversiones pasivas, que no tienen ninguna relación con la actividades locales que se despliegan en cada una de las comunas, estaríamos ante un impuesto inconstitucional dado que se vulneraría lo preceptuado en el numeral 20° del artículo 19 de la CPR, tal como se ha descrito anteriormente, pues dicha patente municipal dejaría de tener el carácter de un "tributo de afectación".

Sostuvo, que en el evento poco probable que se considere a través de una sentencia ejecutoriada, que su representada debe pagar patentes comerciales y que el monto de dicho tributo es superior a 1 Unidad Tributaria Mensual, es menester hacer presente que el D.L. N° 3.063 regula la obligaciones que surgen a propósito del pago de las patentes municipales y la forma como los organismos municipales deben calcular el cobro de las mismas, estableciendo ciertas reglas



que tanto los contribuyentes como las Municipalidades deben acatar. En ese sentido, el artículo 23 del D.L. N° 3.063 describe qué actividades quedarán gravadas con el pago de dicho tributo Municipal. A su turno, el inciso final de la norma en estudio, establece que se dictará un reglamento para regular la aplicación de los mismos. Por otra parte, el artículo 24 del D.L. N° 3.063 establece la manera como se debe calcular el pago por concepto de patentes Municipales, consagrando expresamente un procedimiento para efectuar dicha determinación. A mayor abundamiento, el artículo 29 del D.L. N° 3.063, reglamenta los periodos de pago de las patentes Municipales.

Expresó que de los artículos recién citados, es posible arribar a las siguientes conclusiones en cuanto a la forma de determinar el valor a pagar por conceptos de patentes Municipal, a saber; que está sujeta a contribución Municipal el ejercicio de ciertas profesiones, oficios, industrias, artes y otras actividades lucrativas; el valor por doce meses de patente, será un monto equivalente entre el dos y medio por mil y el cinco por mil, del capital propio de cada contribuyente; los contribuyentes podrán deducir aquella parte del capital propio que se encuentre invertida en otros negocios o empresas afectas al pago de patente municipal; la patente comercial se podrá pagar en dos cuotas; el legislador señala, que se dictará un reglamento que regulará la deducción a que se hace alusión en el literal c) precedente.

Así, de la norma antes citadas, queda absolutamente claro que la forma de determinar el valor a pagar por concepto de patentes municipales se compone y configura de la siguiente manera; i) Determinar el capital propio tributario del contribuyente; ii) Determinar las inversiones que el contribuyente realiza en otras sociedades afectas al pago de patente Municipal; iii) Restar del capital propio tributario del contribuyente, el monto invertido en otras sociedades afectas al pago de patente Municipal; iv) De esa forma, el valor que se obtiene luego de realizadas las operaciones señalada en los números i), ii) y iii) precedentes, debe ser multiplicado por la tasa establecida por la Municipalidad respectiva, la que asciende entre el dos y medio por mil y el cinco por mil del capital propio de cada contribuyente. Teniendo a la vista lo anterior, es manifiesto que la estratosférica suma supuestamente adeudada por su representada y que se *materializa* en el supuesto título ejecutivo no tiene asidero ni fundamento legal alguno, por la simple explicación de que dicho título fundante no detalla debidamente la causa de dicha obligación o, en otros términos, el motivo o fuente de dicha deuda.

Tanto es así, que resulta totalmente cuestionable la supuesta existencia de la causa de la obligación de pago, ya que en lo dispuesto en la demanda que se presenta en contra de su representada se señala que para determinar lo teóricamente adeudado por el año 2016 se ha considerado una tasa de patentes municipales de 0,5x1.000., situación totalmente contradictoria con la realidad, ya que existe un Decreto Alcaldicio de la Ilustre Municipalidad de Nancagua, en el



cual se reconoce expresamente que la Municipalidad no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el D.L. N° 3063, en cuanto a fijar la tasa de patentes municipales. El mismo decreto alcaldicio número 3737 de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil dieciséis que acompaño en esta presentación, señala lo siguiente: Que existe un informe de la Contraloría en que se señala que no hay un decreto alcaldicio que fije el cálculo que se señala en su parte. El citado informe, en su punto 2.1 establece que "Falta Decreto Alcaldicio que fija la tasa aplicada por el municipio al cálculo del valor de las patentes. La necesidad de dictar el respectivo acto administrativo mediante el cual se fije el valor aplicable a las patentes por el período de doce meses equivalente a dos y medio por mil el cinco por mil del capital propio de cada contribuyente, según lo establecido en el inciso segundo del art. 24° del D.L. N° 3.063, sobre Rentas Municipales. El Certificado N° 65/2016, del 21/11/2016, emitido por la Secretaría Municipal, en el cual consta el acuerdo adoptado por el H. Concejo municipal de Nancagua, en la sesión ordinaria N° 191, del 21 de noviembre de 2016, en la cual acuerda fijar el valor aplicable a las patentes, según lo establecido en la norma citada anteriormente". Es evidente que los Certificados en que se basa esta teórica demanda, en la especie el Certificado N° 76 de fecha 12 de Julio 2017, de la teórica secretaria de la Municipalidad, en relación al memorándum N° 99 de fecha 10 de Julio de 2017, no tiene ningún asidero pues a la fecha en la cual habría surgido la teórica deuda no existía ningún decreto alcaldicio en que se fijara la tasa aplicable a las patentes municipales.

Esto entre otras cosas, explica el por qué en los documentos fundantes de esta demanda se reconoce que existe duda respecto a que su representada adeude o no patentes municipales como se ha hecho presente. Es decir, es evidente, como se ha señalado, que debe existir una instancia previa en que se determine si procede o no el pago de patente municipal en que lógicamente se escuche al afectado. En caso de que en definitiva se resuelva por los órganos pertinentes que procede el pago de patente municipal, en ese momento se deberá determinar el monto de lo teóricamente adeudado. Pero escapa de toda lógica y racionalidad que se pretenda generar un título ejecutivo con todas las implicancias que ello tiene sin siquiera la Municipalidad haber escuchado a su parte, y a su vez sin que exista un decreto alcaldicio que regule todo lo relacionado con el cobro de patentes municipales como expresamente lo reconoce el documento que se acompaña a este proceso.

Así las cosas, es evidente que las sumas en exceso que arbitrariamente pretende cobrar la I. Municipalidad de Nancagua a su representada por concepto de patentes Municipales carecen de objeto y causa, por consiguiente, adolecen de un vicio de nulidad, que debe ser declarado por el tribunal.

Fundó también su excepción, que atendida la naturaleza jurídica de la obligación e inexistencia de atribuciones por parte de doña Angelina Bustamante



Montecinos para generar un título ejecutivo y del teórico director de administración y finanzas don Rodrigo Soto Almuna, se pretende crear arbitrariamente un título ejecutivo, dirigirlo en contra de su representada y generar una obligación para con ella. Que la obligación se define como "aquel vínculo jurídico mediante el cual una parte (denominada deudora), debe observar una conducta (denominada prestación) que puede estar dada por dar, hacer o no hacer algo en interés de otra parte (denominada acreedora) y cuyo incumplimiento acarrea consecuencias". En todo vínculo obligacional existe un sujeto activo o, en otros términos, "acreedor", quien es la persona que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de una obligación y un sujeto pasivo, esto es, el "deudor", es decir, aquella persona que debe cumplir la prestación convenida.

Por lo mismo, es característico de las obligaciones la existencia de los siguientes elementos, a saber: a) sujeto activo; b) sujeto pasivo; y c) la prestación convenida. En la supuesta obligación que nacería del supuesto título ejecutivo que evidentemente se autogenera la I. Municipalidad de Nancagua, quien determina todos y cada uno de los elementos de dicho vínculo obligacional, esto es, el sujeto activo, el sujeto pasivo y la prestación convenida es la propia entidad Municipal, vulnerando, sea de paso, todos y cada uno de los principios legales rectores que inspiran y regulan esta materia.

En el caso de autos, no sólo se deja el precio de la obligación al arbitrio de uno de los contratantes, sino que además no existe contraprestación alguna por parte de la I. Municipalidad de Nancagua. Dicha entidad Municipal jamás ha prestado un servicio, de ninguna especie, a su representada. A su turno, su representada, jamás ha producido alguna externalidad negativa que eventualmente afecte en forma perjudicial al desarrollo de la Comuna y que, por lo mismo, justifique el pago de un impuesto de esta naturaleza.

Expuso que es posible afirmar que la supuesta obligación que persigue la I. Municipalidad de Nancagua es nula, por los siguientes puntos; I.-En ningún momento se formó el consentimiento entre su representada y la I. Municipalidad de Nancagua, relativo a las supuestas prestaciones y obligaciones correlativas que la I. Municipalidad de Nancagua asume haber otorgado y contraído, respectivamente. La determinación de la supuesta deuda, se efectúa por un acto unilateral de una de las partes, vulnerando, sea de paso, todo principio jurídico vigente; la determinación de quién es el sujeto pasivo de la obligación y si efectivamente corresponde, no cumple con los presupuestos legales vigentes, según se ha explicado en forma extensa en las secciones uno y dos de esta presentación. Adicionalmente, añadió que en ningún momento a lo largo de toda la presentación de la contraria, se han acreditado las facultades administrativas en virtud de las cuales la supuesta Secretaria Municipal, esto es, la Sra. Angelina Bustamante Montecinos, ha actuado en nombre y representación de la I. Municipalidad de Nancagua y la manera como ha emitido este teórico título



ejecutivo. Lo anterior, se aplica a su vez respecto del teórico Director de Administración y Finanzas (S) don Rodrigo Soto Almuna, quien supuestamente certifica el Memorándum N° 99 de fecha 10 de julio de 2017 al cual escuetamente se refiere el supuesto título ejecutivo.

**Opuso también el número 6° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falsedad del título.** Funda su excepción, en la ineficacia del título ejecutivo, en la especie, el Certificado Municipal N° 76 de fecha 12 de julio del presente año, emitido por la supuesta Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Nancagua, doña Angelina Bustamante Montecinos y que se ha ocasionado como consecuencia de ciertos hechos acaecidos con anterioridad a la presentación de la demanda ejecutiva, los cuales le restan su valor o mérito ejecutivo. En la especie, el Certificado Municipal N° 76 que la ejecutante señala como teórico título ejecutivo, es falso respecto a los datos contenidos en él. En otras palabras, estamos en lo que se denomina falsedad ideológica, vale decir, el documento deja constancia de cosas que son falsas o mentirosas, siendo las formas usadas aparentemente las reales o auténticas. En otros términos, aparece suscrito como un Certificado Municipal que da cuenta de una deuda totalmente inexistente y sin fundamento alguno, basado en un teórico Memorándum emitido por el supuesto Director de Administración y Finanzas don Rodrigo Soto Almuna.

Añadió que es claro, que en el caso de autos, estaría bajo en la hipótesis descrita precedentemente y que haría aplicable lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 464 del CPC. Pues bien, el Certificado Municipal N° 76 emitido por la supuesta Secretaria Municipal de la I. Municipalidad doña Angelina Bustamante Montecinos, expresa en forma arbitraria, caprichosa e irresponsablemente una deuda inexistente, bajo toda perspectiva legal, toda vez que se ha basado únicamente en un teórico Memorándum emitido por el supuesto Director de Administración y Finanzas (S) don Rodrigo Soto Almuna.

Que la falsedad del título debe referirse a hechos que digan relación con la veracidad o autenticidad del título. Pues bien, la falsedad dice relación con la materialidad del documento mismo, o la forma externa de él, situación extremadamente irregular que tiene la virtud de enervar cualquier eventual acción ejecutiva que se entable. Así, un ejemplo en donde el título es falso, se presenta en aquellas situaciones en donde el instrumento contiene declaraciones inexactas o que se alejan de la realidad. Así las cosas, el Certificado Municipal N°76, supuesto título ejecutivo fundante de la arbitraria acción ejercida en autos, da cuenta de una supuesta deuda que debería soportar su representada a favor de dicha entidad Municipal, lo cual dista en lo más absoluto de la realidad. La estratosférica suma que expresa aquel simple certificado no coincide en lo más mínimo con lo que en derecho corresponde, pues según nuestra legislación vigente, su representada no está obligada a pagar por concepto de dicho tributo.



Lo anterior, se manifiesta en forma evidente teniendo especialmente en consideración la naturaleza jurídica de la sociedad demandada en autos lo, cual se ha mencionado en innumerables ocasiones a lo largo del desarrollo de toda esta presentación; condición jurídica indesmentible y que la contraría ha desconocido claramente. Por lo demás, en el improbable evento que considere que su representada está afecta a pagar el impuesto correspondiente a patentes municipales, es menester destacar, desde ya que la estratosférica suma expresada en el supuesto título ejecutivo, dista totalmente de lo que podría llegar a tener que pagar su representada, teniendo en consideración su naturaleza de sociedad de inversión pasiva y las rebajas a que por ley tiene derecho.

Opuso también, **la excepción contemplada en el número 7° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado.** Funda su excepción, en virtud de los argumentos que ya ha expuesto en las excepciones anteriores. Añadió que el título ejecutivo es aquel documento que da cuenta de un derecho indubitable, al cual la ley le otorga la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación de dar, hacer o no hacer en él contenida. Así las cosas, las características del título ejecutivo son las siguientes; a) Sólo pueden ser creados por ley; b) Es autónomo, es decir, se basta a sí mismo, debiendo comprenderse en él todos los elementos que permiten el ejercicio de la acción ejecutiva; c) Deben ser perfectos, esto es, deben reunir todos los requisitos previstos por la ley; d) Constituye un presupuesto para la iniciación del juicio ejecutivo; e) Conllevan una presunción de verdad. Por su parte, los requisitos del título ejecutivo consisten en: que conste en él la existencia de una obligación de dar, hacer o no hacer; que dicha obligación sea líquida, actualmente exigible, y además, que no se encuentre prescrita.

Sostuvo que de conformidad con el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil, el hecho de que la obligación sea líquida significa que la declaración contenida en el título ejecutivo debe ser completa, pudiendo determinarse lo que se debe tanto cualitativamente como cuantitativamente. Como podrá apreciar fácilmente, en la especie el título ejecutivo fundante de la acción materia de autos, no reúne todos los requisitos a que se ha hecho referencia en el punto anterior, toda vez que no se basta a sí mismo, ni se detalla el origen ni el fundamento de la supuesta obligación adeudada, ni tampoco la forma como ésta se determinó. En la especie en el teórico título ejecutivo que sirve de base para esta ejecución, se hace referencia a otro documento anexo, a saber, un supuesto "Memorándum" emitido por un funcionario sin facultades para despachar documentos de tal carácter y naturaleza.

Expuso que el Certificado Municipal N° 76 no es autónomo, requisito esencial señalado por la ley para que un documento tenga mérito ejecutivo. Según



la Real Academia de la Lengua Española la palabra "autónomo" significa lo siguiente, a saber: que tiene autonomía; que trabaja por su propia cuenta. Sin embargo, el Certificado Municipal N° 76, documento fundante de esta acción señala expresamente lo siguiente: "La Secretaria Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Nancagua que suscribe, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 20, letra b) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y de acuerdo a lo indicado en el Memorándum N° 99 de fecha 10 de Julio de 2.017 del Director de Administración y Finanzas (S) don Rodrigo Soto Almuna, certifica que la empresa Inmobiliaria Mosa Limitada, mantiene actualmente la siguiente deuda por concepto de patentes municipales impagas ...".

Pues bien, dicho Memorándum no forma parte del teórico título ejecutivo, lo que viene en ratificar que el supuesto título ejecutivo en cuestión carece de mérito ejecutivo dado que no es autosuficiente. Lo señalado, demuestra fehacientemente y por sí solo, que el supuesto título ejecutivo fundante de la temeraria acción de autos, no se ajusta en lo más mínimo a derecho, toda vez que da cuenta que dicho documento requiere ser complementado por otro documento y de tal manera tener mérito ejecutivo. Además, es necesario destacar desde ya, que resulta —al menos dudoso— la validez jurídica que podría llegar a contener un *simple* Memorándum que no está sujeto a ningún tipo de control, revisión ni fiscalización.

Refirió que a mayor abundamiento, la supuesta obligación contenida en el Certificado Municipal N° 76 de fecha 12 de Julio del año 2017, emitido por la supuesta Secretaria Municipal de la I. Municipalidad de Nancagua doña Angelina Bustamante Montecinos no reúne el carácter de líquida, ya que de la sola declaración contenida en dicho título ejecutivo, no es posible determinar el monto que supuestamente adeudaría la sociedad Inversiones Santa Paula Limitada, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.

Que de un simple análisis del título ejecutivo fundante de la acción presentada por la contraria, es posible vislumbrar lo siguiente: a) El teórico Certificado Municipal acompañado por la contraria no expresa los criterios técnicos que utilizó la entidad Municipal para calcular el monto y el interés a que se sujetaría el pago de la supuesta obligación adeudada por la sociedad Inmobiliaria El Maitén Limitada; b) Además, el título ejecutivo fundante de la acción de la contraria, no contiene una fecha cierta que permita determinar desde cuándo se hizo exigible la supuesta obligación adeudada. Lo anterior queda absolutamente claro al analizar el supuesto título ejecutivo acompañado, el que por lo demás, debería ser autosuficiente plantea las siguientes interrogantes: Al no señalar específicamente el día en que eventualmente se hizo exigible la supuesta obligación, ¿cómo podría determinarse la fecha en que se habrían hecho exigibles los eventuales intereses que se pretenden cobrar? En el mismo sentido



indicado, ¿cómo puede la Secretaría Municipal determinar la variación por IPC indicada si no establece una fecha cierta en la cual se hizo exigible la supuesta obligación?

Sostuvo que lo señalado precedentemente deja en completa evidencia, que el supuesto título ejecutivo, dista de cumplir con todos los requisitos que exige la legislación nacional, para poder tener merito ejecutivo. Tanto es así que tiene que recurrir a otro documento, en la especie, el Memorándum N° 99 de fecha 10 julio de 2017 emitido por don Rodrigo Soto Almuna, en que señala que al parecer mi representada estaría desarrollando una actividad lucrativa, sin patente comercial que ampare su actividad. Es decir, el mismo documento que sirve de antecedente para la presente ejecución, a saber, el Certificado Municipal N° 76 de fecha 12 de julio de 2017, se reconoce que la ejecutante en autos no tiene seguridad de la existencia de la supuesta deuda al señalar que "al parecer" se estaría desarrollando un tipo de actividad económica que daría origen a dicho impuesto. Esto sólo confirma que el documento que serviría de base para esta ejecución no cumple los requisitos para tener la calidad de título ejecutivo.

Indicó que a mayor abundamiento, resulta ilógico que la Municipalidad de Nancagua, por medio del referido Certificado Municipal, pretenda determinar el monto de la supuesta deuda por patente municipal, en circunstancias que para el período que pretende cobrar, específicamente el año 2016, no existía tasa de patentes municipales fijada por Decreto Alcaldicio. En este sentido, lo anterior queda de manifiesto en el propio Decreto Alcaldicio N° 3737 de fecha 21 de noviembre de 2016, el cual dispone en su parte pertinente lo siguiente: "Que, el citado informe, en su punto 2.1 establece que "Falta Decreto Alcaldicio que fija la tasa aplicada por el municipio al cálculo del valor de las patentes." Asimismo, más absurdo aún resulta pretender aplicar la referida tasa con efecto retroactivo.

Por consiguiente, es manifiesto que en el caso de autos el documento acompañado por la ejecutante carece de mérito ejecutivo, siendo incapaz de generar una presunción de verdad a favor de la misma, encuadrándose, por lo mismo, en lo dispuesto en el número 7° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

El **ejecutante con fecha 30 de octubre de 2017** evacuó el traslado conferido, solicitando el rechazo de las excepciones, con costas.

Respecto a la excepción contemplada en el artículo 464 N°14 del artículo 464, esto es la nulidad de la Obligación. Sostuvo como cuestión previa es necesario señalar que la nulidad de la obligación está definida y tratada en el Código Civil de manera lata. Los artículos 1681 y siguientes de dicho cuerpo legal la determinan en sus efectos y alcances, estableciendo las causales de nulidad y los elementos fundantes de la misma. Si uno analiza la excepción opuesta, no se indica que nulidad se está arguyendo, es decir, no saben si la nulidad es absoluta o relativa, u otra calificación, que indique el camino a seguir por el tribunal, para que así una vez determinado ello, se pueda establecer si se basa, en falta de causa o de objeto, de causa ilícita u objeto ilícito u otra situación que la ley la determine como válida para la declaración de nulidad.



Expresó que la jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema ha zanjado este proceso hace años, las sociedades de inversiones o pasivas, siempre pagan patente comercial, la contraria lo único que intenta hacer a través de estas excepciones es alargar el plazo de cobro, y eludir su responsabilidad.

A mayor abundamiento sostuvo que se encuentran fallos, como lo son, rol 10.630-2014, 24.214-2014, 1.530-2015, 22.874-205, etc...En todos ellos y sólo con el objeto de ilustrar a la contraria y al tribunal, se señala que las sociedades de inversiones pagan sin lugar a duda patente comercial, es más ello no sólo se desprende de la ley misma, sino también de la historia fidedigna de su constitución. Señalan además estos fallos, que lo importante no es el ejercicio efectivo del giro social (inversiones), sino que basta incluso la sola posibilidad de ejercerlo para encontrarnos con un hecho gravado y que genera el pago de patente comercial. Con todo la jurisprudencia que mencionó señala de manera explícita que el cobro y la constitución del pago a través del DL 3.063 y del DS 484, se ajustan a la CPR de Chile, entre otros elementos.

Añadió que el argumento de que la CGR señala a través de dictámenes de hace más de 10 años que este tipo de sociedades no paga patente comercial se cae por el sólo hecho de que los todos los dictámenes del año 2012, a la fecha señalan lo contrario, las sociedades de inversiones o pasivas, pagan patente comercial, lo que viene en consonancia con lo expuesto por la Jurisprudencia de la Corte Suprema en los últimos 5 años; sin dejar de lado por supuesto que respecto de este punto no se ha establecido de qué tipo de nulidad se trata.

Expresó que la contraria, realiza todo un análisis de que existen dos tipos de inversiones pasivas, y que sólo una estaría afecta y el otro exento, ya que las rentas de capitales mobiliarios ya pagan impuesto global complementario, y que por ello el cobro de patente comercial a dichas sociedades sería nulo por cuanto estas podrían no estar obligadas a declarar sus rentas mediante contabilidad completa. Toda la elucubración anterior y la retórica jurídica, se desmorona al saber y entender que la Municipalidad cobra las patentes comerciales a aquellas sociedades que estando domiciliadas tributariamente en la comuna de Nancagua tienen un capital propio positivo, de acuerdo a la información que entrega el SII a cada municipalidad del país, y que es la base de cálculo de la patente comercial. Es importante destacar que la información que envía el SII a cada municipio es en el mes de junio de cada año, una vez procesada la declaración de impuesto del contribuyente, esto quiere decir, que el capital propio que llega al municipio es el que declara el propio contribuyente en su declaración anual de impuesto del mes de abril de cada año; por tanto la generación del cobro emana de una declaración de parte del propio demandado.

Sostuvo que en el mismo sentido, esto es, utilizando argumentos sin una base jurídica concreta, la contraria pretende generar una confusión en el tribunal, al mencionar juicio ejecutivo de la misma materia seguido ante el 1° Juzgado de Letras de Curicó, donde efectivamente mediante sentencia de fecha 24 de octubre de 2016, en autos ROL N° C-2064-2015 se acogió excepción referente al N°7 del artículo 464 del código de procedimiento Civil. Al respecto cabe mencionar que la sociedad



demandada en el juicio anterior, es una sociedad agrícola de giro único, que supuestamente solo realiza actividad primaria exceptuada en razón de lo expuesto artículos 2 y 3 del DS 484 de 1980.

Por lo que en síntesis y en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 24 de la ley de rentas municipales, es la propia ley, la que señala de manera expresa, sin mediar interpretación en contrario, que la sociedad de Inversiones se encuentra gravada por patente comercial, lo que ha sido refrendado por nuestra Jurisprudencia tanto administrativa como judicial, de acuerdo a lo ya latamente explicado. –

Que en cuanto a que el cobro sería inconstitucional, ya que se estaría generando un impuesto y que por mandato expreso de nuestra carta fundamental existe reserva legal de ello, así como también afectaría lo expresado en el artículo 19 N°20 de la CPR. En el escenario anterior es dable señalar que la legislación nacional ha entregado a toda persona, institución o grupo la posibilidad de que se ejerzan acciones constitucionales cuando se han vulnerado, menoscabado o perturbado en sus derechos constitucionales. Así las cosas no lee, alguna reserva de derechos para presentar un recurso de protección en contra de su mandante o bien alguna acción ante el Tribunal Constitucional de Inaplicabilidad de las normas expuestas en el DL 3.063 del año 1979. El que la contraria considere que el monto cobrado es excesivo lo puede llamar a organizarse para presentar a través del Presidente de la República una modificación a la aplicación de este gravamen, pero la consideraciones de hecho y jurídicas no la hacen nula.

Refiere también, que en cuanto segundo argumento de la contraria, este es, la nulidad, que la sociedad demandada puede efectuar rebajas de inversiones y que por eso la obligación sería nula. La frase antes expuesta denota dos cosas, la primera de ellas es que la sociedad demandada si paga patente comercial, y la segunda, el desconocimiento de la norma, toda vez que la sociedad demandada, jamás se ha acercado al Municipio, como es su obligación legal, pagar en tiempo y forma la patente comercial, y en dicho escenario jamás tampoco ha acompañado los balances del ejercicio que demuestren la inversión en otra sociedad que pague patente, como el comprobante del pago de dicha patente emitido por otro municipio, que son los requisitos copulativos para tal rebaja.

Sostuvo, que como primer orden de ideas, la nulidad basada en este punto sería la falta de causa, y que esta se produce por cuanto el monto expuesto en el certificado no estaría correcto. Alegar que la falta de motivo de la obligación es que dicha obligación es menor, no la hace nula, la falta de causa se entiende como la falta del elemento que sustenta la exigencia de la obligación en sí misma, por tanto alegar que el monto está mal calculado, derrumba toda la tesis de la contraria, ya que la obligación si tiene causa, o sea existe, pero, según la contraria, estaría malo su monto. En resumen, sostiene que se encauza dentro de esta afirmación la falta de liquidez del título (artículo 464 N°7), lo que también la jurisprudencia ya zanjo.

Indicó que, es dable señalar que la causa de la obligación de autos, es la ley. Efectivamente la norma jurídica, en este caso del DL 3.063 y el DS 484, establecen



qué sujeto será el gravado, una vez determinado eso, cuál será la tasa que se aplica y sobre qué concepto, para luego determinar el monto final dado los reajustes e intereses que se calculan para esta obligación y finalmente como se paga esta obligación.

Así el artículo 47 de la ley 3.063, es el Secretario Municipal quien, en virtud de un acto de autoridad pública, suscribe un certificado al cual la ley ya mencionada le otorga el carácter de título ejecutivo perfecto. Ahora bien, este funcionario no determina de manera antojadiza el cálculo del monto que por concepto de patente municipal debe pagar el contribuyente, sino que es la propia Ley de Rentas Municipales en su artículo 24 la que establece que se entenderá por capital propio “el inicial declarado por el contribuyente si se tratare de actividades nuevas, o el registrado en el balance terminado el 31 de diciembre inmediatamente anterior a la fecha en que deba prestarse la declaración”, considerándose los reajustes, aumentos y disminuciones que deben practicarse de acuerdo con las normas del artículo 41 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto Ley N° 824 de 1974.

Además de lo anterior, es fundamental entender que las patentes comerciales son derechos anuales que se calculan de acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores y con la información que la propia demandada ha entregado en su declaración anual de impuestos; por tanto la patente comercial se calcula en relación al capital propio declarado por el contribuyentes siendo el Servicio de Impuestos Internos quién envía dicha información al municipio. Lo anterior lo ha manifestado de manera clara nuestra Excelentísima Corte Suprema, en fallo recaído en causa N°22.351/2014, sobre recurso de casación en el fondo, se ha determinado que las patentes comerciales que tienen la obligación de pagar los contribuyentes, son anuales, y su pago se devenga el 31 de julio de cada año. Asimismo dicha sentencia señala que el plazo de prescripción es de 3 años contados desde que este gravamen se hubiere hecho exigible.

En seguida, y por aplicación de lo preceptuado en el artículo 48 de la ley de rentas municipales se establece el concepto de IPC e Intereses, calculados en la forma establecida en los artículos 53 y siguientes del Código Tributario. En el entendido anterior se cumple cabalmente con lo expuesto en el Código de Procedimiento Civil para entender la liquidez del mismo. En este mismo sentido el artículo 6° del Decreto ley N°1533 del año 1976, señala Artículo 6°– Interpretese el N° 3 del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil en el sentido de que se considerarán líquidas las obligaciones de dinero en que se hubiere estipulado reajustabilidad o intereses, cuando el título respectivo o la ley señalaren la forma en que se procederá para la determinación del reajuste, la tasa de interés o ambas cosas a la vez. Esta norma será aplicable a los pagarés, bonos, debentures y demás títulos ejecutivos en que la ley permite estipular reajustes e intereses

Manifiestó que si uno analiza el certificado que sirve de base a la ejecución nos encontramos que establece canones de patentes anuales, que estos cobros se determinan por la información que entrega el demandado en su declaración anual de impuesto, y que el reajuste e interés se aplica en razón de lo preceptuado en el



artículo 48 de la ley de rentas municipales, en relación con las normas atinentes del Código Tributario. Frente a ello hablar de Nulidad por falta de liquidez del título basado en que de la sola lectura no se colige lo que se intenta cobrar, no resiste análisis alguno.

Que en cuanto a la inexistencia de atribuciones por parte de doña Angelina Bustamante Montecinos para generar un título ejecutivo, al respecto señaló que en este acápite lo que se pretende por la contraria es llevar el foco de discusión a un ámbito fuera de lo relevante jurídicamente, pues resulta claro de acuerdo a lo esgrimido en los puntos precedentes que la calidad de la suscrita y su labor en la emisión de los certificados se encuentra validada legalmente. Pues como se dijo es el Secretario Municipal quien en virtud de un acto de autoridad pública suscribe un certificado que la Ley le otorga el carácter de título ejecutivo perfecto, no determinando éste de manera antojadiza el cálculo del monto que por concepto de patente municipal debe pagar el contribuyente, sino que es la propia Ley de Rentas Municipales en su artículo 24 la que establece que se entenderá por capital propio “el inicial declarado por el contribuyente si se tratare de actividades nuevas, o el registrado en el balance terminado el 31 de diciembre inmediatamente anterior a la fecha en que deba prestarse la declaración”, considerándose los reajustes, aumentos y disminuciones que deben practicarse de acuerdo con las normas del artículo 41 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto Ley N° 824 de 1974. Por lo que al respecto, solo cabría discutir si efectivamente la aludida presenta la calidad de secretaria de la entidad que represento, lo cual efectivamente es así y se comprobara en juicio dejando sin fundamento alguno el presente argumento de la ejecutada.

Respecto de la excepción del artículo 464 N°6 del Código de Procedimiento Civil; esto es falsedad del título, al respecto y por economía procesal, dan por reiterado lo mencionado respecto al punto en lo principal de esta presentación, en cuanto a la absoluta procedencia del cobro de la deuda en cuanto existir actividad gravada por parte del ejecutado, sumando además que el certificado de autos se genera como resultado de todo un proceso acorde a la normativa vigente al respecto en nuestra ley de rentas.

En el mismo sentido, indicó, que el certificado N°76 que esta parte acompañó con la presentación de la demanda es claro y determinante. En el certificado se detalla expresamente y se señala como se obtienen las sumas cobradas en él. Establece que ellas nacen de conformidad con lo establecido en el artículo 23 y siguientes y artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales, sumado a la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos de Chile de acuerdo a lo expresamente señalado en el artículo 24 en sus incisos 1° y 2° del mismo cuerpo legal y, principalmente lo dispuesto en el oficio N°100 emitido por la Dirección de Administración y Finanzas de fecha 10 de julio de 2017, el cual certifica que la ejecutada de autos adeuda por concepto de patente comercial; toda vez que se encuentra desarrollando actividad lucrativa sin contar con la respectiva patente municipal, la suma de \$76.616.556.



Indicó que es fundamental entender que las patentes comerciales son derechos anuales que se calculan de acuerdo a lo expuesto párrafos anteriores y con la información que la propia persona jurídica demandada ha entregado en su declaración anual de impuestos al SII. Con dicha información, que este organismo envía a la Municipalidad, se genera el cobro; por tanto la información de cálculo de la patente emana de la propia demandada. Enseguida, y por aplicación de lo preceptuado en el artículo 48 de la ley de rentas municipales se establece el concepto de IPC e Intereses, calculados en la forma establecida en los artículos 53 y siguientes del Código Tributario. En el entendido anterior se cumple cabalmente con lo expuesto en el Código de Procedimiento Civil para entender la liquidez del mismo. En este mismo sentido el artículo 6° del Decreto ley N°1533 del año 1976, señala Artículo 6°- Interpretese el N° 3 del artículo 438 del Código de Procedimiento Civil en el sentido de que se considerarán líquidas las obligaciones de dinero en que se hubiere estipulado reajustabilidad o intereses, cuando el título respectivo o la ley señalaren la forma en que se procederá para la determinación del reajuste, la tasa de interés o ambas cosas a la vez. Esta norma será aplicable a los pagarés, bonos, debentures y demás títulos ejecutivos en que la ley permite estipular reajustes e intereses.

Respecto de la excepción del artículo 464 N°7 del Código de Procedimiento Civil; esto es falta de mérito ejecutivo del título que da origen a este proceso. Indicó que es fundamental entender que nuestra jurisprudencia, como asimismo todos los tratadistas han señalado que la excepción del artículo 464 N°7, del Código de Procedimiento Civil es una excepción formal, en el entendido que sólo debe basarse en defectos propios del Certificado que de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la ley 3.063 es el título ejecutivo. La Excma. Corte Suprema ha manifestado reiteradamente que para ser exitosa la opción de la presente excepción, ella ha de sustentarse en situaciones fácticas que se orienten a mermar el valor o la propiedades del título ejecutivo, con el objeto de acreditar que aquel carece de la fuerza de la que, al menos, inicialmente aparece dotado, resultando, en consecuencia, absolutamente impertinentes las alegaciones que pretenden basar tal sentencia en circunstancias que sean ajenas al instrumento en que el ejecutante respalda su acción y conforme a cual se instruyó el procedimiento ejecutivo propiamente tal, todo lo cual claramente no ocurre en autos, por el contrario se acredita la existencia de un título perfecto.

En este orden de ideas, y atendido el mérito de autos, se verifica que el título hecho valer por la ejecutante, tiene fuerza ejecutiva, toda vez que consiste en un certificado de deuda, emitido por el secretario municipal, donde consta una deuda morosa por concepto de patente comercial. Por lo tanto, el título objeto de esta ejecución, es el instrumento idóneo para el cobro de las patentes adeudadas, por lo que es suficiente y tiene fuerza ejecutiva respecto de la ejecutada, debiendo por tanto, rechazarse la excepción incoada, como se ha realizado por la jurisprudencia en el caso concreto que nos convoca.

Expresó que en el certificado se detalla expresamente y se señala como se obtienen las sumas cobradas en él. Establece que ellas nacen de conformidad con lo establecido en el artículo 23 y siguientes y artículo 47 de la Ley de Rentas



Municipales, sumado a la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos de Chile de acuerdo a lo expresamente señalado en el artículo 24 en sus incisos 1° y 2° del mismo cuerpo legal, pudiendo apreciarse que el certificado señala de manera clara y expresa en el desglose de todos sus ítems el origen de la deuda, los períodos cuyo cobro corresponde, además de los antecedentes necesarios que permiten ejecutar el cobro de la misma y que le otorgan al certificado, por mandato expreso de Ley, el carácter de título ejecutivo perfecto, bastándose a sí mismo.

Por lo cual a la luz de lo mencionado resulta claro que es el Secretario Municipal quien en virtud de un acto de autoridad pública suscribe un certificado que la Ley le otorga el carácter de título ejecutivo perfecto, no determinando éste de manera antojadiza el cálculo del monto que por concepto de patente municipal debe pagar el contribuyente, sino que es la propia Ley de Rentas Municipales en su artículo 24 la que establece que se entenderá por capital propio “el inicial declarado por el contribuyente si se tratare de actividades nuevas, o el registrado en el balance terminado el 31 de diciembre inmediatamente anterior a la fecha en que deba prestarse la declaración”, considerándose los reajustes, aumentos y disminuciones que deben practicarse de acuerdo con las normas del artículo 41 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el Decreto Ley N° 824 de 1974.

Sostuvo que como han dicho es fundamental entender que las patentes comerciales son derechos anuales que se calculan de acuerdo a lo reseñado, en base a la información que la propia demandada ha entregado en su declaración anual de impuestos y por tanto la patente comercial se calculan en relación al capital propio declarado por el contribuyente y es el Servicio de Impuestos Internos quién envía dicha información al municipio respectivo. Frente a lo anterior la información que sirve de base para el cálculo de la patente comercial emana de la propia demandada.

Que, con fecha **31 de octubre de 2017**, se declararon admisibles las excepciones opuestas y se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertido sobre los que ésta debía recaer.

Que, con fecha **07 de septiembre de 2018**, se citó a las partes a oír sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, con fecha **12 de julio de 2017**, compareció don **JUAN JOSE VALENZUELA**, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, cédula nacional de identidad N° 14.399.523-2, como mandatario judicial de la Ilustre Municipalidad de Nancagua, persona jurídica de derecho público, RUT N°69.090.400-4, representada legalmente por su Alcalde don Luis Eduardo Escanilla Gaete, cédula nacional de identidad N°7.831.337-4, todos domiciliados en Domingo Jaramillo N°99, Nancagua.

Que, en conformidad a lo establecido en los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, interpuso demanda en juicio ejecutivo de mayor cuantía, por obligación de dar en contra de la empresa **INMOSA S.A.** persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario N°76.141.469-0, representada legalmente por don Patricio Mario Uribe Andrade, ignoraba profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°11.714.532-8, todos domiciliados para estos efectos; en Avenida Armando Jaramillo 1053, Nancagua, solicitando se despachará en su contra,



mandamiento de ejecución y embargo por la suma de \$76.616.556.- ordenando que se siga adelante con la ejecución hasta el entero pago de dicha suma, con expresa condenación en costas.

**SEGUNDO:** Que, el ejecutado opuso a la ejecución las excepciones contemplada en el N° 14 artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, Nulidad de la obligación, N° 6 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, falsedad del título y N°7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva sea absolutamente, sea con relación al demandado.

**TERCERO:** Que la ejecutante contestó la oposición a la ejecución en los términos vertidos en la parte expositiva de esta sentencia, solicitando el rechazo de las excepciones opuestas, con costas.

**CUARTO:** Que, el título ejecutivo fundante de la presente acción, consiste en el Certificado de Deuda N° 76/2017, emitido por el Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Nancagua, doña Angelina Bustamante Montecinos, de fecha 12 de julio de 2017, agregado digitalmente al expediente electrónico en el primer otrosí de la demanda ejecutiva de folio 1, el que da cuenta que la ejecutada mantiene una deuda por concepto de patentes municipal impaga por la suma de \$76.616.556. Por su parte el demandado agrego a estos autos el memorándum N° 99 de fecha 10 de julio de 2017, emitido por don Rodrigo Soto Almuna, Director de Administración y Finanzas (S) de la Ilustre Municipalidad de Nancagua, el que da cuenta de la existencia de patente impaga por la suma de \$76.616.556, del cual es deudora la empresa Inmosa S.A; y Decreto Alcaldicio N° 3737 de fecha 21 de Noviembre del año 2016, emitido por don Wilson Duarte Rabello, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Nancagua, el que da cuenta de que se fijó la tasa para el pago de las patentes municipales de Nancagua.

Que, tanto el Certificado de Deuda como el Memorandum, documentos agregados por las partes de este juicio, ponderados legalmente, y que no habiendo sido objetados por la contraria, logran producir plena prueba, en cuanto a que la sociedad ejecutada mantiene una deuda por concepto de patente municipal por la suma de \$76.616.556. A su vez, ponderado en forma legal el decreto alcaldicio, este produce plena prueba en cuanto a que el día 21 de Noviembre del año 2016, fue fijada la tasa para el pago de las patentes municipales de Nancagua.

**QUINTO:** Que en cuanto a la **excepción 14° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la nulidad de la obligación**, respecto al primer fundamento de la excepción opuesta, esto es, que la demandada es una sociedad denominada sociedad de inversión pasiva, por lo que estaría exenta del pago de impuestos, es necesario precisar que para determinar si una sociedad es o no sujeta del pago de patente municipal, lo que resulta relevante es definir si su objeto social incorpora, contiene, describe o permite la realización de actividades lucrativas, al tenor de lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales. En este sentido, en virtud de la prueba rendida por el ejecutado y teniendo presente lo dispuesto en el



artículo 1698 del Código Civil, en orden a que incumbe al ejecutado probar lo alegado, la prueba rendida resulta ser insuficiente para poder determinar si efectivamente su objeto social corresponde al de una Sociedad Pasiva, con la finalidad de quedar exento del pago del impuesto.

En cuanto al segundo argumento en que funda la excepción opuesta, referido a la inexistencia de atribuciones de la Secretaria Municipal para crear un título ejecutivo, este deberá ser descartado, toda vez que al respecto, se debe estar a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales el que establece que :*“Para efectos del cobro judicial de patentes, derechos y tasas municipales, tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitido por el Secretario Municipal”*, razón por la cual es la ley la que faculta a la Secretaria municipal a fin de que emita el certificado de deuda respectivo, otorgándole a su vez mérito ejecutivo.

Que referente al argumento de inconstitucionalidad del cobro, los fundamentos esgrimidos no dicen relación con la excepción en análisis, por lo que también será rechazado este argumento.

En virtud de lo anteriormente razonado, esta excepción no podrá prosperar.

**SEXTO:** Que en cuanto a la **excepción 6° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falsedad del título**; cabe precisar que un título es falso cuando no es auténtico, es decir, cuando no ha sido realmente otorgado y autorizado por las personas y de la manera que en el título se expresa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 del Código Civil, así las cosas y como lo ha dicho la doctrina, la falsedad supone un hecho delictuoso que se traduce entonces en la suplantación de personas o en adulteraciones de un título, debiendo destacarse que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha fallado que sólo en esos dos casos cabe hablar de falsedad del título.

Que así las cosas, los argumentos expuestos por la ejecutada nada tienen que ver con la excepción materia de análisis y más bien obedecen a otra circunstancia lo que en definitiva obsta a un pronunciamiento favorable más aún si tampoco hay prueba que demuestre lo aseverado.

**SÉPTIMO:** Que referente a la **excepción N°7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el título tenga fuerza ejecutiva sea absolutamente, sea con relación al demandado**. En cuanto al argumento que dice relación con que el título no es autónomo ya que requiere ser complementado con el memorándum N° 100, en este sentido se debe estar a lo preceptuado en el ya referido artículo 47 de la ley de Rentas Municipales, que otorga mérito ejecutivo al certificado emanado de la Secretaria de la Municipalidad, por lo que dicho instrumento se basta así mismo, no siendo necesaria su complementación con otro documentos. Y referente a la alegación de la exigibilidad de la obligación, el período objeto de cobro, es la patente del año 2016, tal como consta en el certificado tenido a la vista.

Que, a mayor abundamiento conforme lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto Ley 3.063 *“Para efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales, tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda emitido por*



el secretario municipal. La acción se deducirá ante el tribunal ordinario competente y se someterá a las normas del juicio ejecutivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil.”

El artículo precedente previene expresamente que el certificado sobre patentes, derechos y tasas municipales que acredite una deuda, constituye título ejecutivo cuando es emitido por el secretario municipal, el que conforme el artículo 20 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, tiene la condición de ministro de fe. Así las cosas, observado el certificado N° 77/2018 que se encuentra agregado a estos autos, se puede colegir que fue emitido por el Secretario Municipal de la Municipalidad ejecutante y que de su tenor, se desprende que contiene todas las menciones, requisitos o exigencias para constituir un título ejecutivo, en conformidad a la ley que regula la materia de autos y teniendo además presente que las probanzas aportadas por la parte ejecutada no resultan suficientes para desvirtuar dicho título y restarle el carácter de ejecutivo del que está dotado. Razones todas que llevan a la conclusión de que la excepción opuesta por la ejecutada del N°7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, debe ser rechazada en razón de que dicho título reúne los requisitos o condiciones establecidos por las leyes, para que tenga fuerza ejecutiva con relación a la ejecutada o demandada de autos.

**OCTAVO:** Que el resto de la prueba, no pormenorizada ni ponderada, en nada altera las conclusiones ya arribadas precedentemente.

Por estas consideraciones, visto además lo dispuesto en los artículos 160, 161, 169, 170, 254, 434, 441, 464 N° 14,6, 7, 468, 470, 471 del Código de Procedimiento Civil, Decreto Ley N°3063 sobre Rentas Municipales se declara:

**I.-** Que, **se rechazan** las excepciones opuestas por la ejecutada en la presentación de fecha 16 de octubre de 2017.

**II.-** Que, se ordena seguir adelante con la ejecución hasta hacer al ejecutante entero y cumplido pago de su acreencia, en capital e intereses pactados y moratorios.

**III.-** Que, se condena en costas a la ejecutada.

Anótese, regístrese, notifíquese personalmente o por cédula y archívese en su oportunidad.

**RoI N° C-1242-2017**

Sentencia dictada por doña **DANIELA PAZ PAVEZ CORREA**, Jueza Suplente del Segundo Juzgado de Letras de San Fernando.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **San Fernando, diez de Enero de dos mil diecinueve**





Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.  
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>